

## LA ZONA DE PENUMBRA DEL CAPITAL<sup>1</sup>

Por detrás tan sólo de la guerra, las pensiones se han convertido en uno de los asuntos que más dividen –y que acaso resulten más decisivos– en la política contemporánea. Las movilizaciones populares de masas en torno a esta cuestión durante la década de 1990 derribaron al gobierno de Silvio Berlusconi en Italia (1994-1995) y al de Alain Juppé en Francia (1995-1996). En el verano de 2003, representa el desafío político más directo para los partidos gobernantes con independencia de su color político: para los socialdemócratas alemanes, los neogaullistas franceses, los democristianos austriacos y el gobierno recientemente elegido del PT en Brasil. Tras su vuelta al poder, Berlusconi está haciendo presión para que se llegue a un Maastricht del *welfare*, es decir, a una reforma del sistema de pensiones en el ámbito europeo que tendría, según se lee en el *Corriere della Sera*, «la misma fuerza vinculante que tuvo Maastricht para la moneda común». Cruzando el Atlántico, el alcalde de México, DF, Andrés Manuel López Obrador está utilizando el segundo sistema universal de pensiones –después del de Cuba– más antiguo de América Latina –financiado, dentro de un marco presupuestario predeterminado, con arreglo a una gestión inmobiliaria más eficaz y a una «austeridad republicana»– como un prometedor trampolín para una posible apuesta presidencial.

Además de derribarlos, las pensiones han creado gobiernos. A mediados de la década de 1950, el nuevo sistema de pensiones de Alemania Federal, que establecía una cotización con arreglo a los ingresos de los contribuyentes, cimentó el poder democristiano al mismo título que el rearme alemán y la *Westbindung* [política de alineación con el bloque atlántico] durante más de una década, arruinado al final por la ineptitud de Ludwig Erhard, que, no obstante, se opuso a la reforma del sistema de pensiones. La socialdemocracia sueca sobrevivió al desgaste político del *boom* de la década de 1950 gracias a un plan profesional de pensiones ambicioso y cuidadosamente diseñado, en favor del cual hizo una inten-

---

<sup>1</sup> Robin BLACKBURN, *Banking on Death. Or, Investing in Life: The history and future on pensions*, Londres y Nueva York, Verso, 2002, 550 pp.

sísima campaña. El golpe maestro fue la estipulación de que los trabajadores del sector terciario –la mayoría de los cuales contaban ya con un plan de pensiones de empresa o de ramo industrial sometido a una negociación colectiva– podían decidir la participación en un plan privado del mismo alcance, igualmente generoso y protegido contra la inflación. Tanto los empresarios como la dirección liberal de uno de los principales sindicatos de los trabajadores del sector terciario estaban interesados en un plan independiente, pero se vieron obligados a admitir que no podían ofrecer una alternativa equivalente. Desde las elecciones de 1960 en adelante, los trabajadores del sector terciario trasladaron su apoyo político *en masse* a los socialdemócratas, que continuaron en el poder por un periodo adicional de quince años hasta que la cuestión nuclear polarizó al electorado con arreglo a otro tipo de cuestiones.

Las políticas de pensiones se sitúan en la intersección de tres principales arterias sociales. Los cambios del ciclo vital humano –una mayor longevidad, una jubilación anticipada– han hecho, en primer lugar, que cobren una importancia creciente en la experiencia cotidiana. En segundo lugar, el derecho a la jubilación ha tendido a adquirir una legitimidad de la que disfrutaban no muchas otras prestaciones del Estado del bienestar, hasta el punto de ser defendido desde la perspectiva de los derechos humanos. Jugar con el mismo es una empresa muy peligrosa para todo sistema democrático; la «seguridad social» estadounidense es quizás la única gran institución del New Deal que ha sobrevivido a las atenciones de Reagan, Clinton y Bush. En tercer lugar, habida cuenta de la enorme cantidad de fondos que se manejan, las pensiones han atraído el interés de las altas finanzas. Las pensiones públicas suponen entre el 10 y el 15 por 100 del PIB en Europa occidental y a mediados de la década de 1990 suponían el 7 por 100 del PIB en Estados Unidos. Los fondos de pensiones, en su mayoría privados, se han convertido en los principales actores de la economía mundial. Cuando llegaron a su ápice en 1999, sus activos totales ascendían a casi la mitad –el 46 por 100– de la renta mundial, cuando suponían el 30 por 100 en 1992. Tras sufrir pérdidas de 2.700.000 millones de dólares en los últimos tres años –que equivalen a casi dos años de la renta nacional británica– los activos de los fondos de pensiones suponen de nuevo un tercio del PIB mundial, o casi el doble (180 por 100) del producto conjunto de todos los países de renta baja y media. El 56 por 100 de los activos de estos fondos están en manos de los fondos estadounidenses, mientras que los británicos poseen el 9 por 100.

Sin embargo, el reconocimiento de la importancia de la economía política de las pensiones se ha hecho esperar. Cuando, a mediados de la década de 1980, un avisgado estudiante de posgrado escandinavo le dijo a su director (un politólogo del sur de Europa, distinguidísimo y perspicaz, profesor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia) que quería escribir una tesis sobre las pensiones, tuvo que enfrentarse a un muro de incompreensión. ¿A quién podía interesarle un tema tan aburrido? Sin embargo, en 1994 el Banco Mundial abrió el fuego con su documento

más ambicioso y agresivo hasta la fecha. *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and to Promote Growth* [Prevenir la crisis de las pensiones: políticas para proteger a la tercera edad y promover el crecimiento] constituye un ataque (de la extensión de un libro) a las pensiones públicas –consideradas poco más que un último remiendo para evitar la indigencia– y una alabanza de los sistemas privados de pensiones, insertos en los mercados financieros. Esta singular publicación combinaba los inmensos recursos del banco, utilizados para una investigación de amplio espectro, con modelos de comparación profundamente tendenciosos, amén de agresivos alegatos políticos. Estelle James y los demás diseñadores de políticas del banco Mundial comprendieron, mucho antes que Donald Rumsfeld, que el mejor modo de atacar las instituciones sólidamente implantadas de Europa occidental consistía en ganarse a los europeos del Este, muchos de cuyos políticos, antiguos burócratas y creadores de opinión llevaban tiempo siendo condicionados para girar alrededor del sol que más calienta. En 1996, el Banco Mundial organizó un encuentro en Budapest en el que se podía participar previa invitación y al que envió a sus economistas –incluyendo a uno de los principales embajadores de los planes de pensiones pinochetistas en Chile– para «vender» las pensiones privadas en Europa central y oriental. Todos los especialistas en política social se mostraron escépticos o críticos; sin embargo, consiguieron embelesar a los altos funcionarios de los ministerios de Hacienda. Una fascinación que no quedó limitada al ex bloque soviético: ese mismo año se supo que la ley de Presupuestos Generales del Estado de Finlandia había recogido párrafos enteros directamente del informe del Banco Mundial, sin citarlo, so capa de un informe propio del Ministerio de Hacienda en Helsinki.

Así pues, *Banking in Death* de Robin Blackburn es un libro de lo más oportuno; es también una bella lectura, animado por la sabiduría de, *inter alia*, La Rochefoucauld, Gogol y Adorno, con ilustraciones de Goya, entre otros. Como estudioso, Blackburn es conocido sobre todo como uno de los principales historiadores sintéticos de la esclavitud, pero aporta al estudio de las pensiones la amplísima gama de su experiencia como editor de la *NLR* y una reciente estancia de trabajo en universidades transatlánticas. Por regla general, los escritores académicos sobre políticas sociales son científicos sociales o historiadores, y tienden a respetar una división del trabajo profundamente asentada: los historiadores escriben sobre los orígenes y los caminos del desarrollo, mientras que los científicos sociales lo hacen sobre asuntos y consecuencias actuales. Bien es cierto que algunos sociólogos históricos se han sumergido en el pasado; pero Blackburn escribe aquí sobre el presente como historia, en tanto que historiador narrativo.

Un estudioso que penetra en un nuevo campo a menudo puede ofrecer nuevas intuiciones evitando cualquier contacto con los caminos trillados del especialista; aunque esto puede acarrear la comisión de algunos errores de detalle, en este caso son insignificantes. Naturalmente, Escandinavia

y los escandinavos a veces resultan difíciles de aferrar. Hay razones interesantes para considerar a Suecia y no a Nueva Zelanda, como sucede en el libro que reseñamos, como un país pionero de las pensiones universales. El expatriado danés y experto en política social Gösta Esping-Andersen probablemente no tuviera en gran estima la forma sueca de su patronímico, mientras que el economista y sindicalista germano-sueco Rudolf Meidner, una importante fuente de inspiración para Blackburn, sigue con mucha vida y actividad en el seno de los «socialdemócratas contra la UME». La afirmación no corroborada de que, en 1952, doce países latinoamericanos contaban con sistemas de pensiones «que afectaban a la mayoría de la población» resulta difícil de creer; según el especialista latinoamericano en política social Carmelo Mesa-Lago, sólo cuatro países –Argentina, Chile, Cuba y Uruguay– contaban en 1960 con seguros sociales que cubrían a la mayoría de la población; a ellos se unieron Brasil y Costa Rica en la década de 1970.

Por otra parte, la nueva perspectiva que Blackburn introduce en este campo ha ser tomada en serio por los analistas de política social. Esta perspectiva implica al menos tres aspectos: en primer lugar, una conciencia de la importancia política internacional de las controversias, las orientaciones políticas, las instituciones y las luchas en torno a las pensiones que se extienden desde Singapur hasta España, desde Chile hasta Grecia; un panorama que es explorado exhaustivamente gracias a unos informes detallados de las discusiones y de las propuestas británicas y estadounidenses; en segundo lugar, algunas penetrantes e impresionantes observaciones sobre la economía global de los fondos de pensiones y de la gestión de estos fondos; en tercer lugar, una argumentación fundamentada en favor de una política radical sobre las pensiones que acierte a penetrar en los actuales procesos de acumulación del capital. Sin lugar a dudas ésta es la sección más original del libro. El sistema de pensiones de Blackburn tendría dos pisos y estaría compuesto de una pensión pública que contribuiría con fondos equivalentes al menos al 40 por 100 de los ingresos, así como una serie de fondos de pensiones que vendrían a añadir otro 30 por 100, hasta llegar a un techo de tres veces el salario medio. El segundo piso estaría constituido por tres clases de fondos relacionados con el centro de estudios superiores, los empleadores y el lugar de residencia de las personas, incluyendo a las mutuas de seguros, los gestores de planes de ahorro y los sindicatos, cuyo conjunto estaría supervisado por una junta de pensiones. Los proveedores actuales de planes de pensiones serían admitidos en este sistema que gozaría de ventajas fiscales a condición de aceptar determinadas reglas de redistribución moderada y de auditoría. Esta pensión secundaria para todos –en los países en los que sólo la mitad de los trabajadores dependientes disfrutaban de ella en la actualidad– recibiría una financiación adicional gracias a una imposición obligatoria sobre las acciones con arreglo a los beneficios de las corporaciones, justamente la idea que animaba el proyecto, políticamente desafortunado, de los fondos de asalariados de Meidner. La complejidad un tanto barroca de este sistema se desprende de la estrategia política de

Blackburn, que apunta a construir su proyecto a partir de las instituciones y prácticas existentes en Gran Bretaña y Estados Unidos.

Cabe resumir la contribución de Blackburn como una crítica de la economía política del capitalismo gris; en cuanto tal, se trata de una contribución excepcional. La alienación del trabajador anglosajón con respecto a su derecho a la jubilación resulta verdaderamente asombrosa. El plan de jubilación está «patrocinado» por la empresa del trabajador, que nombra a una junta de «depositarios» para que supervisen el fondo de pensiones; la empresa, mientras tanto, tiene el derecho de abstenerse de hacer contribuciones durante los años dorados del mercado de valores y de modificar o incluso cerrar el fondo cuando llegan los malos tiempos. Los ahorros de los trabajadores dependientes son confiados —a cambio de unos honorarios, por supuesto— a los gestores del fondo, que invierten en valores de otras corporaciones, pero que son responsables en primer lugar ante los accionistas del fondo. Estos «inversores institucionales» pueden elegir convertirse o no en accionistas activos de las corporaciones en las que invierten. Los titulares de las pensiones no tienen ninguna voz en estos procesos; los intentos sindicales de influir en las políticas de inversión de los fondos de pensiones de sus miembros no han sido reconocidos, con el respaldo de la judicatura, ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Como señala Blackburn, estos enormes fondos no tienen unos derechos de propiedad claros ni están dirigidos por ninguna figura empresarial. Constituyen una inmensa zona gris entre una legalidad en penumbra y la economía que se extiende desde el derecho de propiedad vigente y la práctica corporativa, por una parte, al mundo del delito de cuello blanco personificado por el latrocinio y el fraude de Robert Maxwell y de los ejecutivos de Enron. Éste es el sistema en el que descansa la mitad afortunada de las poblaciones estadounidense y británica; para la otra mitad, no queda sino la pensión mínima no contributiva que, en Gran Bretaña, si tomamos como base el salario medio de un trabajador varón, significa una disminución de dos tercios en los ingresos tras la jubilación.

Blackburn nos ofrece una guía fascinante para atravesar esta jungla, conduciendo con maestría al lector a lo largo de las 530 páginas sin que éste llegue a perder el interés. No obstante, corresponde al autor de esta reseña la exploración de aquellos puntos en los que los caminos desechados podrían haber abierto una ruta igualmente estimulante. *Banking in Death* proporciona un impresionante trasfondo histórico al debate moderno, distinguiendo entre una tradición «puritana» de los seguros privados en Gran Bretaña, Norteamérica y Holanda y una tradición «barroca» del subsidio público que se desarrolló en Francia, España y Alemania, en un principio con las pensiones militares; las propuestas radicales aunque nunca realizadas que circularon durante la Revolución Francesa reciben una atención mayor de lo que suele ser habitual. Esta profundidad temporal se ve compensada por una amplia panorámica espacial de las evoluciones que se han producido en el siglo xx y que cubre el marco central del Atlántico

Norte con algunas instantáneas de Extremo Oriente, un apretado resumen de la Eurasia comunista y una ojeada a América Latina.

Los elegantes resultados son más que suficientes para el análisis y la crítica contemporáneos, que constituyen el principal objetivo de Blackburn. Sin embargo, el énfasis en la política y la economía en este capítulo histórico, así como en las secciones más contemporáneas, significa que el autor presta poca atención a los aspectos sociológicos y de clase de los sistemas de pensiones —que, por supuesto, también expresan y refuerzan pautas de relación social—. El sistema de seguridad social de Bismarck —iniciado tras la profunda impresión que causó en uno de sus principales consejeros, Hermann Wegener, la insurrección de los *communards* parisinos, a la que pudo asistir al lado de las tropas de asedio alemanas— se preocupó de separar los planes para los trabajadores manuales industriales de los de los trabajadores de cuello blanco, mientras que excluían a todos los trabajadores agrícolas y domésticos. La exclusión favorecía los intereses del terrateniente, así como los de la base urbana del régimen, que contaba con servicio doméstico, a la par que mantenía dividida a la clase obrera. El sistema de pensiones bismarckiano surgió de y contribuyó a mantener un sistema de clases en Europa continental que conservó su fuerza y su importancia política hasta que la desindustrialización empezó a debilitar de otra manera a la clase obrera. Del mismo modo, los trabajadores por cuenta propia, los agricultores y otros asalariados se mantuvieron al margen —tal y como se les aconsejaba— de los planes de seguro social de los trabajadores dependientes. Una combinación de clientelismo estatal y de enérgicas luchas entre grupos de interés condujo a un mosaico de *régimes spéciaux*, sobre todo en el sur de Europa y en América Latina, con pensiones muy generosas y específicas para determinados grupos. Bajo tales circunstancias, las reivindicaciones de política social general no podían convertirse en cuestiones de clase, habida cuenta que las fracciones de la clase obrera con mayores recursos ya habían visto satisfechas sus reivindicaciones. El resultado de ello fue la constitución de planes relativamente caros junto a enormes bolsas de pobreza. El hecho de que los ataques neoliberales a estas pensiones específicas se hayan encontrado con movilizaciones de clase de amplio espectro —que fueron espectaculares sobre todo en Francia, en diciembre de 1995, pero que aún continúan— demuestra una extraordinaria dinámica de solidaridad de clase, cuyo análisis más detenido echamos en falta en el libro de Blackburn.

La extrema miseria del sistema de pensiones británico —al menos si lo comparamos con los patrones norte y centroeuropeos— puede explicarse por una serie de factores: las profundas divisiones de cualificación de la clase obrera británica; la fragmentación de su tradición sindical; la fuerza de las instituciones financieras del país; lo pintoresco de su administración; el error decisivo que se cometió con motivo de la refundación del sistema fiscal, al entronizar el tipo fijo, con los consiguientes resultados de esta política en las décadas de 1960 y 1970. Resulta más fácil entender que la solidaridad y la fuerza de clase estadounidenses no pudieran exten-

derse más allá del ámbito de los fondos de pensiones de ramo industrial que consiguieron los mineros, los trabajadores del sector automovilístico y otros sindicatos industriales gracias a las luchas del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, de nuevo en ambos casos habría resultado esclarecedor poder contar con un extenso análisis sociológico de la política de clase que estas luchas acarrearón, para complementar la sensibilidad neoinstitucionalista del autor. Por supuesto, a Blackburn no se le escapa la relación entre la previsión social y la cohesión social; sin embargo, este modelo de análisis apenas cuenta dentro del marco del autor.

El sistema de pensiones pinochetista en Chile, diseñado por el economista licenciado en Harvard y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales José Piñera, pretendía que los trabajadores del sector formal se sintieran como propietarios individuales, sin ningún tipo de vínculos sociales, ni siquiera con sus empresarios; sólo se conectarían con la sociedad a través de la supuesta armonía de los mercados. Sus pensiones futuras dependerían completamente de la buena marcha de sus cuentas de ahorros en manos de gestores delegados dentro del fondo elegido. Tal y como lo ha descrito José Piñera, el simbolismo jugó un papel importante en esta cuna de la modernización neoliberal y de la fuerza militar. Todos los miembros del plan de pensiones recibían su propia cartilla de ahorro o *libreta*, como manifestación tangible de su *status* individual. El comienzo del plan se anunció para el primero de mayo de 1981.

La experiencia sueca fue todo lo contrario de la fragmentación latina y anglosajona o de la división teutónica. Las políticas de previsión social de Bismarck condujeron a la creación de una real comisión en Suecia: la Comisión de Seguros de los Trabajadores. Aunque de sus trabajos no se desprendió directamente ninguna legislación, su informe de 1888 –uno de los primeros análisis empíricos de las clases sociales– sentó las bases de toda la discusión sobre la política social del país a lo largo del siglo xx. El comité tenía encomendada la tarea de investigar las necesidades de seguridad social de los trabajadores y «personas similares a éstos». Llegó a la conclusión de que el 94,25 por 100 de la población sueca entraba dentro de estas categorías, incluyendo en éstas a toda la población agrícola, así como al pequeño estrato de trabajadores dependientes de cuello blanco. Aunque, en aquella época, Suecia ya no era desde luego una sociedad de «pequeños agricultores y trabajadores», sino un orden social industrial emergente y lleno de conflictos gobernado por una elite administrativa predemocrática, el análisis de clases que se llevó a cabo no fue tan sólo el cálculo de un estadístico inconformista. El mandato a tenor del cual el comité debía examinar la situación social no sólo de los trabajadores, sino también de las «personas similares», fue ampliado tras la insistencia del importante partido de los pequeños propietarios agrícolas y sus conclusiones fueron unánimemente aprobadas. El mismo análisis volvió a salir a la superficie con motivo de la ley de pensiones del gobierno liberal en 1913, que propuso que todo el mundo, salvo un escaso porcentaje de los

muy ricos, gozara de los beneficios de un modesto seguro social. En el debate parlamentario a que dio lugar, una mayoría se mostró convencida de que la exclusión de los «muy ricos» resultaría innecesariamente complicada y costosa. Ese mismo año, la Dieta sueca adoptó una «pensión popular» para todo el mundo.

El núcleo del libro de Blackburn lo constituye un conjunto de capítulos que analizan la economía política del capitalismo de las pensiones anglosajón contemporáneo. En éstos se exploran los detalles de la gestión transatlántica de los fondos con una excelente capacidad de observación y de comprensión, que arrojan luz sobre su mediocre rendimiento, su poderosa influencia económica y sus déficit de responsabilidad, haciendo énfasis en el carácter paradójicamente mal definido de los derechos de propiedad del sistema de pensiones. La indagación de Blackburn sobre la mecánica de la «cultura de la renta variable» muestra la debilidad del rendimiento económico y de los ingresos de la clase trabajadora que ha dejado tras de sí la expansión impulsada por las universidades de investigación estadounidenses y el gasto militar. La arremetida contra las pensiones públicas encabezada por Washington y la campaña en favor de los planes privados de ahorro merece todo un capítulo, que se centra en el informe del Banco Mundial, pero que dibuja también una panorámica global que incluye a Chile como el modelo del Banco Mundial. Le siguen dos capítulos que recogen y discuten propuestas británicas y estadounidenses recientes salpicados con impresionantes detalles y un paciente buen humor; incluso el agresivo Martin Feldstein es presentado ecuánimemente y con respeto, por no decir con aquiescencia. No existe, que yo sepa, ninguna historia contemporánea equivalente de la economía política del capitalismo de pensiones anglosajón.

*Banking on Death* termina con las propuestas de Blackburn para un «buen sistema de pensiones y una acumulación responsable» que contempla, como ya hemos descrito anteriormente, un sistema dotado de dos pilares: uno formado por una pensión pública financiada con recursos públicos y otro nutrido por una amplia variedad de fondos sometidos a regulación pública y al cumplimiento de determinados criterios de responsabilidad social; conjuntamente sufragarían el 70 por 100 de los ingresos anteriores. El plan de Blackburn, así como sus argumentos, parte del paisaje institucional existente en el mundo anglosajón; sus recomendaciones se concentran ante todo en la provisión de fondos y en las nuevas reglas de gestión e inversión a las que habrían de estar sometidos. En tiempos como éstos, en los que las nuevas propuestas radicales se han convertido en una especie en peligro de extinción, el esfuerzo de Blackburn debe ser bienvenido calurosamente.

No obstante, se echa en falta algo. Esto se torna evidente cuando se coteja el informe del Banco Mundial con el libro de Blackburn y, en particular, su bosquejo político final. Aunque el libro termina con una perspectiva de «socialización gradual del capital» y una reafirmación del compromiso



político de toda la vida del autor, el capítulo es predominantemente técnico. Es la voz de un profesional progresista que se dirige a un conjunto de lectores compuesto de economistas, periodistas económicos y gestores de fondos partidarios de su reforma. El tono del informe del Banco Mundial era muy distinto: «Los costes de la transición de un sistema de pensiones de jubilación a otro son considerables, y cabe esperar que haya una fuerte resistencia». Como Blackburn, sus autores partían de las instituciones existentes; a diferencia de él, exponen un plan de demolición. La página 261 de *Averting the Old Age Crisis* nos informa de que: «El primer paso consiste en reformar el pilar público elevando la edad de jubilación, [...] reduciendo la cuantía de las prestaciones [...] y aligerando la estructura de las mismas. El segundo paso consiste en crear el pilar privado». La página 261 continúa explicando: «El trabajo preliminar debe implementarse a través de una amplia campaña de información pública para que las expectativas se avengan al hecho de que las viejas promesas son perniciosas para la economía e imposibles de mantener [...] y para asegurarse de que los trabajadores comprenden el coste global del programa actual».

Habida cuenta de que carezco de la familiaridad de Blackburn con los sistemas estadounidense y británico, y estando básicamente de acuerdo con su estrategia consistente en partir de las instituciones vigentes, no puedo ofrecer ninguna alternativa concreta. Sin embargo, desde fuera parece más prometedor partir de las deficiencias de las instituciones anglosajonas para los jubilados de hoy como para los de mañana. La mitad o más de los trabajadores dependientes británicos y estadounidenses no gozan de una pensión secundaria, mientras que las pensiones británicas son las menos cuantiosas de Europa. En los últimos diez años aproximadamente, cientos de miles han perdido sus pensiones a manos de bandidos parapetados en las corporaciones y de estafadores; muchos otros, como muestra Blackburn, sobreviven a duras penas con su seguro de jubilación. No sé cuántos pensionistas pobres británicos habrán de morir el próximo invierno, como sucediera a principios de la década de 1990. Pero lo cierto es que (véase el cuadro adjunto) el actual desbarajuste anglosajón de pensiones públicas y privadas contribuye a ofrecer uno de los peores seguros de jubilación del mundo rico.

En términos de pobreza relativa de la tercera edad, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos constituyen un grupo sin par. Entre los países del estudio de rentas de Luxemburgo —que excluye a Japón, Grecia y Portugal, pero incluye a la mayor parte de Europa del Este además de Japón, México e Israel— sólo los mexicanos y los israelíes, que cuentan con un porcentaje de entre el 20 y el 23 por 100 de pensionistas muy pobres, están manifiestamente peor que los anglosajones (con la excepción de Canadá). Taiwan ocupa una posición intermedia entre Gran Bretaña y Estados Unidos; Rusia es comparable a Gran Bretaña. Los irlandeses dejan a sólo un 3 por 100 de sus ancianos en la pobreza severa; sin embargo, como en Estados Unidos, alrededor del 25 por 100 son inequívocamente «pobres». Así pues, ¿cuál debería ser el primer paso para eli-

minar verdaderamente la pobreza y la inseguridad de la tercera edad? ¿Y el segundo paso, y el tercero? Habida cuenta de que «cabe esperar que haya una fuerte resistencia», parece que hace falta algo más de pensamiento político.

CUADRO 1. *Pobreza relativa entre las personas mayores*

	Año	Porcentaje muy pobre	Porcentaje pobre
Alemania	1994	4,0	7,0
Australia	1994	12,4	29,4
Austria	1995	6,9	10,3
Bélgica	1997	3,7	11,7
Canadá	1998	1,7	7,8
Dinamarca	1997	1,7	6,6
España	1990	3,9	11,3
Estados Unidos	2000	15,0	24,7
Finlandia	2000	1,1	8,5
Francia	1994	3,4	9,8
Gran Bretaña	1999	10,2	24,7
Italia	1994	4,5	12,2
Holanda	1994	3,3	6,4
Noruega	1995	0,7	14,5
Suecia	1995	1,5	6,4
Suiza	1992	4,7	8,4

Renta disponible, después de impuestos y transferencias, entre personas de más de 64 años, que gozan de menos del 40 por 100 («muy pobres») y de menos de la mitad («pobres») de la renta media de la población nacional, corregida con arreglo al tamaño de la unidad doméstica. Último año disponible.

*Fuente.* Estudio de rentas de Luxemburgo. Disponible en: [www.listproject.org/keyfigures/povertytable](http://www.listproject.org/keyfigures/povertytable).

Entre las guerras que han proporcionado el redoble de la pasada década, las pensiones —o la «inversión en la vida»— se han convertido en un asunto crucial de la economía política global, así como de la nacional. Cuando Berlusconi llama a un «Maastricht de las pensiones» en el que se trata de imponer el modelo del mísero sistema de pensiones británico, está tocando los clarines que anuncian una guerra social en Europa. Está por ver que la cruzada tenga éxito. Sin embargo, no cabe duda de que el envejecimiento del mundo, y de Europa y Japón en particular, habrán de continuar; y que las cuestiones de la jubilación, de la dignidad y de los cuidados cobrarán protagonismo; y que los enormes fondos de pensiones, envueltos en su penumbra legal y económica, seguirán constituyendo uno de los rasgos del capitalismo global; y que los grupos de presión financieros seguirán haciendo campaña para «gestionar» más dinero de otras personas. En estas aguas tumultuosas y bajo un cielo encapotado, *Banking on Death* se yerge como un faro que proporciona un foco de orientación asentado en una sólida base de investigación.